EL SUFRIMIENTO AJENO

El coste humano de los préstamos de la Corporación Financiera Internacional mediante intermediarios financieros

Mujer indígena en Monte Olivo (Guatemala). Su comunidad ha sufrido represión en relación a un proyecto financiado por IFC.[1] Foto: Santiago Botón, TeleSUR Guatemala

Cada vez es más habitual que los fondos para el desarrollo se canalicen a través de terceros, como bancos o fondos de capital de inversión privados. La Corporación Financiera Internacional, el principal impulsor mundial de este modelo de financiación, canalizó de esta manera 36.000 millones de dólares en tan sólo los cuatro años previos a junio de 2013.[2] Pero, ¿qué consecuencias tiene para las personas este mecanismo "no intervencionista" de financiación del desarrollo? ¿Constituye un riesgo excesivamente elevado para las comunidades y sus medios de vida, dadas sus limitaciones en materia de protección social y medioambiental? El presente informe narra historias de personas que se esconden tras las altas finanzas y las estadísticas, y se plantea si las reformas de este modelo de préstamos han sido suficientes para proteger a las comunidades.

INTRODUCCIÓN

Desde la crisis financiera de 2008, el Grupo del Banco Mundial (GBM) ha incrementado enormemente sus préstamos al sector financiero. En los cuatro años previos a junio de 2013, la división del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), invirtió 36.000 millones de dólares en intermediarios financieros, entre los que se encuentran bancos comerciales, fondos de capital inversión privados y fondos de cobertura.[3] Según estudios recientes, la inversión en el sector financiero es mayor que el volumen de los préstamos concedidos por el Grupo del Banco Mundial a importantes sectores sociales: supera en un 50% a los préstamos directos al sector sanitario, y triplica la cantidad que el Grupo del Banco Mundial prestó directamente al sector educativo en el mismo período.[4] Entretanto, este modelo de financiación y los costes humanos y medioambientales que acarrea reciben cada vez más críticas.

Los préstamos al sector financiero han pasado a dominar la cartera del Grupo del Banco Mundial. Constituyen el 62% del gasto total de la IFC, que a su vez representa la mitad de la actividad del Grupo del Banco Mundial.[5] Asimismo, muchas de las mayores y más importantes instituciones financieras del mundo, desde el banco de desarrollo brasileño BNDES y el Banco Europeo de Inversiones hasta el Fondo Verde para el Clima y el nuevo Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (GIF, por sus siglas en inglés), están promoviendo cada vez más este modelo de préstamo.[6]

IFC justifica su inversión en el sector financiero aduciendo que estimula el crecimiento económico y le permite ampliar "su presencia y su impacto sobre el desarrollo".[7] Sostiene que "IFC invierte en intermediarios financieros a fin de alcanzar el doble objetivo de erradicar la pobreza extrema e impulsar una prosperidad compartida."[8] En efecto, en las economías en desarrollo existe un déficit que debe subsanarse: el acceso a los servicios financieros y a la financiación privada, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social, a menudo brilla por su ausencia.[9] Sin embargo, las deficiencias del sistema de la IFC a la hora de medir los impactos de los préstamos mediante intermediarios sobre el desarrollo tienen como consecuencia la práctica inexistencia de datos que demuestren resultados positivos en términos de desarrollo. Según un informe, enormemente crítico, del Grupo de Evaluación Independiente del Grupo del Banco Mundial, dicho sistema "se basa en cifras indirectas procedentes de la cartera de las instituciones financieras, como el número de préstamos concedidos a un sector de actividad específico y la calidad de dicha cartera. IFC apenas tiene idea de cuáles son las consecuencias subyacentes para sus beneficiarios finales, y cualquier reclamación sería difícilmente atribuible a la intervención de la IFC."[10]

"Si bien los organismos públicos afirman que esta estrategia facilita una asignación más eficiente del capital, un mayor aprovechamiento de los fondos privados, o una mejor orientación hacia las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que apenas disponen de datos que demuestren que estas inversiones generan impactos positivos en términos de desarrollo, y mucho menos que no perjudican a las comunidades y el medio ambiente."

Proyecto Bretton Woods[11]

Sin embargo, estas críticas no son una novedad. Críticos y defensores de este modelo de financiación han intercambiado argumentos técnicos y estadísticas en numerosos informes,[12] cartas entre organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el Banco,[13] e informes de seguimiento y auditoría.[14] Es la cara humana –las consecuencias tangibles para algunas de las personas más pobres y vulnerables de los países en desarrollo– la que apenas ha recibido atención. El quid de la cuestión es si, canalizando sus fondos a través de terceros, la IFC pierde el control sobre cuál es el destino final de ese dinero. El actual modelo

exige a los clientes de la IFC que respeten sus políticas de salvaguardia social y ambiental.[15] Sin embargo, la IFC no garantiza que la mayoría de los proyectos financiados posteriormente por sus clientes cumplan con esas normas. Si, tal y como afirma el propio organismo de control del Banco,[16] es habitual que la IFC desconozca el destino final del dinero, y por lo tanto no pueda garantizar que éste no tenga efectos perjudiciales (o que de hecho tenga un impacto positivo en el desarrollo), ¿cuáles son las consecuencias para las personas que, sobre el terreno, se ven afectadas por los proyectos financiados con este dinero que viene de tan lejos? Ésta es la pregunta clave que deben analizar y abordar tanto el Grupo del Banco Mundial, su Directorio Ejecutivo y accionistas, como otras instituciones financieras instituciones de crédito, antes de lanzarse a ampliar aún más los préstamos a intermediarios financieros.

IFC, en respuesta a las críticas recibidas en los últimos dos años, ya ha llevado a cabo reformas de sus préstamos mediante intermediarios financieros. Jin-Yong Cai, Vicepresidente de la IFC, ha afirmado que “evaluaremos nuestro éxito en función del impacto de nuestros proyectos en el desarrollo, y no del volumen en dólares de nuestras inversiones. Estamos cambiando nuestra cultura institucional con este propósito.”[17]

Pero ¿bastará con las reformas previstas? El objetivo del presente informe es analizar una serie de preguntas básicas, pero esenciales. En primer lugar, y ante todo, ¿cuáles son los costes humanos de los préstamos mediante intermediarios financieros cuando las salvaguardias sociales y ambientales no funcionan? ¿Y por qué dichas salvaguardias no funcionan? ¿En qué medida las reformas han hecho frente a estos problemas? ¿Qué más debe hacerse para garantizar que no haya perjuicio para las comunidades y, si lo hay, cómo pueden exigir responsabilidades a los financiadores?

HISTORIAS HUMANAS DE CAMBOYA, HONDURAS, LA INDIA Y GUATEMALA

Camboya y Laos: la inversión de la IFC en Dragon Capital Group Ltd

La comunidad de Kanat Thom hace frente a la excavadora de la empresa para proteger su bosque sagrado. Foto: Equitable Cambodia

Resumen del proyecto

Desde 2002, la Corporación Financiera Internacional (IFC) ha invertido un total de 26,95 millones de dólares en el grupo de inversión con sede en Vietnam Dragon Capital Group Ltd (DCGL) y en uno de los fondos que gestiona, Vietnamese Enterprise Investments Ltd (VEIL).[18] Según IFC, los objetivos de su inversión son apoyar las iniciativas de reforma del mercado emprendidas por el Gobierno vietnamita y promover el desarrollo del mercado de valores de ese país. Uno de los mecanismos a través de los cuales la IFC preveía alcanzar estos objetivos era "promover la buena gestión empresarial en DCGL, convirtiéndolo en un ejemplo a imitar por otras empresas vietnamitas".[19] IFC clasificó estas inversiones como de riesgo medio/alto (Intermediarios financieros Tipo 1/Tipo 2). Según los documentos accesibles al público, uno de los requisitos exigidos por el sistema de gestión social y ambiental era que se garantizase el cumplimiento de los requisitos del país receptor, incluyendo en el caso de los sub-proyectos "financiados con fondos de la IFC a través de su línea de financiación". También se exigió a DCGL que garantizase el cumplimiento de las políticas de salvaguardia social y ambiental de la IFC.[20]

Sin embargo, dada la falta de transparencia de la IFC, es imposible determinar si en realidad estas medidas han llegado a adoptarse (por ejemplo, no se sabe si DCGL/VEIL ha realizado informes de impacto ambiental o informes anuales de desempeño), y las evaluaciones de la IFC sobre la capacidad de su cliente para llevar a cabo dichos informes de impacto ambiental, si es que las hay, no son públicas. La reclamación de las comunidades ante el mecanismo de

reparación y control del cumplimiento de la IFC, la oficina del asesor en Cumplimiento /Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) concluye que “a pesar de la falta de información disponible, es obvio que la IFC no cumplió con sus obligaciones de evaluación y supervisión de forma eficaz y coherente. Si se llegaron a emprender medidas para obligar a su cliente a mejorar su sistema de gestión social y ambiental y a garantizar que su sub-proyecto respetaba la legislación camboyana, éstas no fueron eficaces”.[21]

DCGL/VEIL es accionista de una de las mayores empresas privadas de Vietnam, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).[22] HAGL tiene la concesión de aproximadamente 50.000 hectáreas de terreno en las que, a través de varias filiales y empresas participadas, explota plantaciones de caucho natural, caña de azúcar y palma aceitera en las vecinas Camboya y Laos.

Impactos del proyecto

> *“Ahora tenemos que trabajar mucho… desde que se otorgó la concesión no tenemos suficiente para comer… cuando no hay alimentos suficientes, los reservamos para nuestros hijos y maridos.”*
>
> Mujer de la aldea de Kak, en Ratanakiri

Los terrenos concedidos a HAGL en Camboya y Laos coinciden en gran medida con unas tierras que las comunidades locales han reclamado legalmente, de las que dependen para sobrevivir, y entre las que se encuentran tierras ancestrales de los pueblos indígenas.[23] En la provincia camboyana de Ratanakiri, la puesta en marcha de estas explotaciones de HAGL ha repercutido negativamente o constituido una amenaza para al menos dieciocho aldeas, en las que viven aproximadamente 15.000 personas. En las provincias de Attapeu y Xekong, en Laos, muchas comunidades indígenas también se han visto afectadas. Las comunidades afectadas por las explotaciones de la empresa en ambos países han sufrido graves daños, que constituyen una violación de los derechos humanos.[24]

Mam Sen de la aldea de Inn, en una parcela de terreno rodeada por una plantación de HAG, se niega a abandonar unas tierras que han pertenecido a su familia desde la época de sus bisabuelos. Foto: Equitable Cambodia

Ni HAGL ni las autoridades de ninguno de los países han solicitado el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, a pesar de que las explotaciones acarrean graves consecuencias directas para las tierras, territorios y recursos naturales de estas comunidades. Las amenazas y la intimidación han excluido la posibilidad de manifestar con libertad la oposición a este proyecto.

Según una encuesta realizada recientemente en trece de las aldeas afectadas, al menos 164 hogares han perdido parcelas residenciales y tierras de labranza de propiedad individual, mientras que comunidades enteras han sufrido la pérdida de tierras comunales y bosques.[25] Lugares sagrados para las comunidades locales, como bosques sagrados y cementerios, también han sido profanados o destruidos.

> *"Nuestra gente solía contar con un gran bosque en el que buscar vides, extraer resina y talar árboles para construir casas. Pero ahora, desde que llegó la empresa, no hay nada. Se acabó."*
>
> Hombre de la aldea de Inn, Ratanakiri

La confiscación de las tierras y la destrucción de los bosques han provocado un brusco deterioro del nivel de vida de las comunidades afectadas, en las que el 91% de los hogares han informado de una reducción de sus ingresos.[26] La pérdida de las tierras y bosques, y la contaminación de los arroyos debido a los productos químicos utilizados en las explotaciones de HAGL han reducido enormemente la capacidad de la población local para cultivar, cazar, pescar y extraer resina, además de provocar una situación de inseguridad alimentaria en algunas aldeas.[27] Las mujeres tienen dificultades para cumplir con sus labores diarias, como recolectar productos forestales, por ejemplo leña y hortalizas, o cuidar del ganado y cultivar sus tierras.

"Queremos que el Banco Mundial sepa que su dinero se está utilizando para destruir nuestra forma de vida. Ahora, estamos rodeados de empresas. Nos han quitado las tierras y bosques comunitarios. Tememos que pronto no nos quedará ninguna tierra, y perderemos nuestra identidad. ¿El Banco Mundial cree que esto es desarrollo?"

Representante de una de las comunidades que presentó la reclamación ante la CAO

Las comunidades afectadas no han podido disponer de vías de recurso efectivas contra estas vulneraciones de los derechos humanos. En algunos casos, la empresa ofreció indemnizaciones de pequeña cuantía como compensación por la pérdida de tierras agrícolas; sin embargo, los hogares entrevistados por *Equitable Cambodia* y *Inclusive Development International* consideran que estas indemnizaciones son insuficientes e inadecuadas, y quieren recuperar sus tierras. No se ha ofrecido ningún tipo de compensación por la pérdida de bosques y tierras comunales, ni por la contaminación de los arroyos.[28]

> *"No queremos una compensación económica, sino recuperar nuestras tierras, porque de acuerdo con nuestra tradición, nuestra subsistencia no debe basarse en el dinero. A largo plazo, y a diferencia de la tierra, el dinero no puede alimentarnos ni a nosotros ni a las generaciones futuras."*
>
> Aldeano de Kanat Thom, Ratanakiri

Para la puesta en marcha de las explotaciones de la empresa en las zonas de la concesión, tanto en Camboya como en Laos, se han talado bosques con un alto valor de conservación y que acumulan reservas de carbono, lo cual contraviene la legislación nacional de ambos países.[29] También preocupa el hecho de que, cuando HAGL pasó a formar parte del mercado profesional de valores de la Bolsa de Londres, admitió públicamente que no estaba respetando la legislación nacional: *"Algunos de nuestros actuales proyectos se están*

llevando a cabo sin las necesarias autorizaciones, permisos y licencias gubernamentales, y la ejecución y funcionamiento de algunos de ellos no cumple plenamente con la legislación y normativas vigentes".[30] Sin embargo, ni IFC ni otros grandes inversores han declarado ser conscientes de esta afirmación.[31] HAGL sostiene que, durante todo su proceso de inversión en Camboya, ha respetado en todo momento la legislación y normativa de ese país.[32]

En febrero de 2014, las comunidades camboyanas afectadas presentaron una reclamación ante la CAO. HAGL y las comunidades afectadas se reunieron por primera vez durante un proceso formal de resolución de disputas en enero de 2015. Sin embargo, las comunidades afectadas en Laos siguen sufriendo la pérdida de tierras y recursos naturales sin que haya habido recurso, y en su mayoría desconocen la posibilidad de presentar una reclamación ante la CAO.

Honduras: Inversión de la IFC en Banco Ficohsa

Un equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) visita a Marta Julia López, la viuda de Ciriaco de Jesús Muñoz. Foto: defensoresenlinea.com

Resumen del proyecto

En 2011, la IFC invirtió 70 millones de dólares en Banco Ficohsa (Ficohsa), un banco hondureño que financia a pequeñas y medianas empresas.[33] Corporación Dinant (Dinant) es una empresa agroindustrial integrada de Honduras que en 2009 recibió de la IFC un préstamo directo por valor de 15 millones de dólares.[34] La CAO, en respuesta a las acusaciones de violencia contra los agricultores tanto dentro como en los alrededores de las explotaciones de palma aceitera de Dinant en el Valle hondureño de Aguán,[35] inició en agosto de 2012 una auditoría de cumplimiento de la inversión de Dinant, revelando considerables fallos tanto en la evaluación de riesgos de la IFC como en la aplicación de sus políticas sociales y ambientales. En 2013, en el transcurso de dicha auditoría, la CAO tuvo conocimiento de que Dinant era uno de los principales prestatarios de Ficohsa, y como resultado, la IFC también estaría vinculada financieramente a Dinant a causa de esta inversión en

Ficohsa.[36] Por lo tanto, en agosto de 2013, la CAO inició una segunda investigación sobre el préstamo de Ficohsa.[37]

El informe de la CAO sobre el préstamo de Ficohsa criticaba a la IFC por financiar a Ficohsa sin el control apropiado, ya que sus conclusiones previas contra Dinant implicaban que en ese momento IFC habría participado financieramente con una empresa acusada de fomentar los conflictos sobre la tierra y la violencia.[38] El proceso de aprobación del préstamo de Ficohsa siguió adelante incluso después de que la IFC tuviera conocimiento de los problemas en torno al préstamo concedido a Dinant. No sólo Dinant era el tercer mayor cliente de Ficohsa en el momento del préstamo, sino que la CAO señaló además que, según informó el propio Banco en 2012, Ficohsa tenía en cartera 64 clientes de categoría A (con un riesgo elevado de provocar impactos sociales y ambientales negativos). De ellos, sólo el 48% cumplían con sus políticas sociales y ambientales. La CAO concluyó que, a pesar de ello, la IFC no determinó qué medidas debía adoptar su cliente para mitigar ese riesgo, lo cual constituye un enorme error en términos de aplicación de la diligencia debida.[39] La falta de transparencia de la IFC respecto a la identidad de los clientes de alto riesgo de Ficohsa hace que sea imposible verificar la totalidad de las repercusiones de estos fallos.

Impactos del proyecto

> *"Los pobres necesitan tierras para cultivar… Ya no soy como antes, como cuando él [Teodoro Acosta] estaba aquí. Todo ha cambiado y no hay nadie que me proteja, sólo Dios."*
>
> María Concepción Membreño, viuda de Teodoro Acosta

En las décadas de 1990 y 2000, el Gobierno de Honduras aprobó una serie de leyes por las que asignaba tierras de propiedad estatal, que previamente habían formado parte de un centro de entrenamiento militar, a campesinos sin tierra del Valle de Aguán. Aunque la cesión de la mayor parte de estas tierras se llevó a cabo sin incidentes, el caso de la finca El Tumbador generó polémica; se trata de un terreno considerado como propiedad estatal por el Instituto Nacional Agrario (INA), pero cuya propiedad reclama Miguel Facussé, propietario de Dinant y el tercer mayor cliente de Ficohsa.[40] Debido a la aparente incapacidad del Gobierno hondureño para resolver el conflicto, miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) ocuparon parte de la finca El Tumbador.[41] Cultivaron la tierra durante cuatro meses, antes de ser desalojados por las fuerzas armadas hondureñas y por guardias de seguridad contratados por Dinant el 14 de agosto de 2010.

El 15 de noviembre de 2010, los campesinos decidieron volver a ocupar las tierras, como último recurso para presionar al Gobierno a fin de que resolviese el conflicto.[42] Según las declaraciones de los testigos, cuando el grupo de aproximadamente 160 campesinos se acercó a la finca El Tumbador, miembros del decimoquinto batallón del ejército hondureño y guardias de seguridad contratados por Dinant empezaron a dispararles.[43] Cuatro campesinos resultaron heridos, y el grupo huyó a una finca cercana. Tal y como relató un testigo, "algunos de nosotros teníamos machetes y comida, eso es todo. Llovían las balas. Eché a correr y recibí un disparo en la boca", contó a los investigadores, mostrando la cicatriz que la herida de bala ha dejado en su rostro.[44]

A medida que la noticia del tiroteo se fue difundiendo, los campesinos empezaron a recibir llamadas telefónicas de sus vecinos, que les informaban de que camiones de las fuerzas de seguridad se estaban acercando a la finca.[45] Sin previo aviso, la multitud recibió disparos desde dos lados con armas de gran calibre. Los campesinos huyeron para buscar refugio entre los arbustos, en un intento de escapar. Durante más de cuatro horas, las fuerzas de seguridad peinaron la zona en busca de supervivientes. Algunos testigos relatan que las fuerzas de seguridad los encontraron y que, apuntándoles con sus armas, les dijeron que corrieran. Otros no tuvieron tanta suerte: Teodoro Acosta, Raúl Castillo, Ignacio Reyes García, Ciriaco de Jesús Muñoz y José Luis Sauceda Pastrana murieron durante el ataque.[46] Las autopsias revelaron que Sauceda y Castillo fueron disparados por la espalda; que el cuerpo de Acosta tenía siete heridas de bala; y que a Reyes y Acosta los dispararon a quemarropa. Según un testigo de la comunidad de Guadalupe Carney, "yo estaba volviendo a casa cuando le alcanzaron [a Ignacio Reyes García], se bajaron del camión militar y le golpearon salvajemente, y después le dispararon en el lado izquierdo de la cabeza."[47] Además de las cinco muertes, se denunció la violación de cuatro mujeres en medio de la confusión.[48]

María Concepción Membreño, viuda del activista Teodoro Acosta, durante su declaración al periodista Marvin Palacios. Foto: defensoresenlinea.com

Dinant, a través de un correo electrónico enviado a la organización de derechos humanos International Human Rights Federation (FIDH) el 6 de mayo de 2011, afirmó que los guardias de seguridad dispararon en defensa propia: "En relación a las cinco muertes mencionadas en el informe, y al incidente que ha tenido lugar en la finca El Tumbador, los guardias de seguridad de la empresa de seguridad Orión (una empresa subcontratada por nuestra empresa para custodiar nuestra propiedad) dispararon en defensa propia, ya que estaban siendo atacados por intrusos con armas de gran calibre. A instancias de nuestra empresa, los guardias de seguridad se han puesto a disposición de las autoridades competentes que, según tenemos entendido, han abierto un expediente contra ellos para que pueda demostrarse que las cinco muertes son resultado de las medidas que tuvieron que adoptar para proteger sus vidas, o para determinar el carácter de los acontecimientos que tuvieron lugar ese

desafortunado día. La empresa no ha negado este incidente y de hecho ha estado colaborando con las autoridades en su investigación a fin de contribuir a aclarar esta deplorable situación."[49]

Las organizaciones campesinas niegan rotundamente estas acusaciones, asegurando que estaban desarmados y que las armas se colocaron en los cuerpos de los campesinos después de su muerte. La mujer de uno de los campesinos que perdieron la vida, que hasta la fecha desconoce si alguien está investigando la muerte de su marido, manifestó su indignación ante las fotografías aparecidas en el diario *La Tribuna*, propiedad de Facussé, y en las que puede verse a su esposo fallecido con una AK-47 sobre su pecho. Señalando su casa, con el tejado de paja, se pregunta "¿cómo vamos siquiera a tener una de estas armas? ¿No ve cómo vivimos? A veces no tenemos bastante para comer". También afirma que un periodista local le contó que él fue el primero en fotografiar los cuerpos, y que en ese momento no había ningún arma sobre ellos.[50]

Esta tragedia se ha visto agravada por el hecho de que no se ha llevado a sus responsables ante la justicia. Aunque en diciembre de 2012 un juez acusó de homicidio a cinco guardias de seguridad, sólo un mes más tarde otro juez desestimó provisionalmente los cargos aduciendo que la acusación carecía de pruebas. La investigación oficial estuvo plagada de errores procesales, lo cual complica la puesta en marcha de un proceso judicial efectivo. Los fiscales decidieron no apelar la desestimación del juez.[51] El propietario de Dinant, Miguel Facussé, se ha negado a responder a una citación para testificar y nunca ha sido investigado por su papel como supervisor de los guardias implicados en la violencia. Hasta la fecha nadie ha sido juzgado por la masacre. No obstante, en abril de 2014, la Unidad Especial de Investigación de muertes violentas en el Bajo Aguán informó a la organización no gubernamental local COFADEH de que habían iniciado una nueva investigación sobre las muertes.

En abril de 2014, en respuesta a las presiones tanto de la sociedad civil como de su propia Junta Directiva,[52] tras el informe de investigación de la CAO sobre su préstamo a Dinant, la IFC elaboró un Plan de Acción[53] y contrató a la organización Consensus Building Institute, con sede en Washington DC, para determinar si era posible una mediación para resolver los conflictos entre el Gobierno, Dinant y las comunidades afectadas. IFC también contrató al despacho de abogados Foley Hoag para asesorarse sobre cuestiones de fuerzas de seguridad y derechos humanos relacionadas con el Plan de Acción de Seguridad de Dinant, así como para facilitar que un tercero con credibilidad investigase las acusaciones vertidas anteriormente en relación a las acciones de las fuerzas de seguridad de Dinant en el Valle de Aguán. Dinant se ha comprometido a aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Por su parte, el Gobierno hondureño ha creado una unidad especial para investigar 147 muertes que se han producido en el marco del conflicto del Valle de Aguán, a fin de determinar sus verdaderas causas, identificar a los responsables y garantizar su captura y enjuiciamiento.[54] Oxfam confía en que estas medidas positivas se mantengan y fortalezcan, a fin de garantizar que haya justicia tanto en la resolución de las muertes como en relación al conflicto sobre la tierra.

No obstante, si bien estas iniciativas positivas podrían mejorar en cierta medida la situación, ninguna de ellas podrá compensar el sufrimiento de las familias de

las víctimas de El Tumbador, que se enfrentan a un futuro incierto. Las viudas de los fallecidos aseguran tener dificultades para dar de comer a sus hijos tras perder el apoyo de sus compañeros. María Concepción Membreño, viuda de Teodoro Acosta, está criando a cinco niños en una pequeña parcela de tierra de la comunidad Guadalupe Carney. [55] Para Martha Julia López Oliva, viuda de Ciriaco de Jesús Muñoz y madre de cuatro hijos, “el asesinato de mi esposo ha cambiado mi vida, vivimos momentos complicados, tenemos que enfrentarnos al miedo y a la incertidumbre económica, la supervivencia es difícil... no es lo mismo sin él.”[56] El resto de las viudas está sufriendo un calvario similar. Cuatro años después de los trágicos acontecimientos que destrozaron las vidas de estas familias campesinas, su causa judicial está paralizada y tienen pocas esperanzas de que se haga justicia, a menos que exista voluntad política suficiente como para garantizar una investigación efectiva e imparcial de las muertes en Bajo Aguán.

Guatemala: La inversión de la IFC en la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura

Mujeres y hombres de Barillas mantienen una resistencia pacífica y rechazan la construcción de una presa hidroeléctrica. Foto: Giovany Ujpan Mendoza, Oxfam

Resumen del proyecto

En 2008, la IFC otorgó préstamos por valor de 20 millones de dólares y capital por valor de 10 millones de dólares a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), una institución financiera que financia pequeños y medianos proyectos de infraestructura en América Latina. CIFI, a su vez, concedió a Hidro Santa Cruz (HSC) un préstamo de 8,2 millones de dólares y hasta 2,5 millones de dólares para una financiación intermedia.[57]

En 2009, HSC, filial de la empresa española Hidralia, empezó a comprar tierras en Santa Cruz Barillas, una región aislada y relativamente tranquila de Huehuetenango, Guatemala. La empresa adquirió diez hectáreas de terreno a

través de intermediarios, explicando a quienes las vendieron que la propiedad se utilizaría para cultivar café y cardamomo.[58] En realidad, la empresa se estaba preparando para construir una presa hidroeléctrica llamada Cambalam. El hecho de que HSC no consultara abiertamente a las comunidades vecinas generó desconfianza entre la población local, fundamentalmente indígenas mayas que comparten unos valores ancestrales y dependen de la agricultura de subsistencia. A medida que los guardias armados y los dispositivos de seguridad iban entrando en la zona, las comunidades empezaron a manifestar su oposición; las tensiones se intensificaron aún más cuando HSC empezó a construir carreteras de acceso y a instalar maquinaria de construcción en las inmediaciones de una catarata con valor espiritual para la población local. El hecho de que la empresa no trabajase con la comunidad y la consiguiente desconfianza generada han desencadenado una serie de secuestros, arrestos y violencia que han sembrado el miedo en la zona de Barillas.

Los documentos de la CIFI califican el proyecto de “socialmente responsable”, afirman que “no genera conflicto con las comunidades locales” y aplauden su “gran apoyo por parte de la población local y nacional”.[59] La CIFI considera que la presa pertenece a la Categoría B (no constituye un riesgo elevado), ya que “los posibles impactos y riesgos ambientales y sociales son limitados”, y se ha comprometido a cumplir con las Normas de Desempeño de la IFC sobre pueblos indígenas, impactos ambientales y sociales y compra de tierras.[60]

La propuesta es que la presa se construya en el río Q’anb’alm, que toma su nombre de la lengua maya local Q’anjob’al, y significa “jaguar amarillo”. Foto: Giovany Ujpan Mendoza, Oxfam

Impactos del proyecto

> *"No estamos en contra de la energía hidráulica (…) a lo que nos oponemos es al comportamiento traicionero de estos hombres, acusando a la gente y convirtiéndoles en delincuentes."*

Entrevista a un líder comunitario sobre el que pesa una orden de detención, 7 de septiembre de 2012

La desconfianza se desbordó hasta convertirse en violencia en 2009, fecha en que los enfrentamientos llevaron a la población local a detener a los guardias de seguridad de la empresa y pedirles que firmasen un compromiso en el que aceptasen evacuar la zona. Desde ese momento, la empresa comenzó a recurrir a medios judiciales en contra de los opositores al proyecto; con la colaboración del Gobierno, la empresa se dedicó a silenciar a la oposición, con los tribunales estatales dictando docenas de órdenes de detención contra los líderes comunitarios quienes, a causa de su pobreza, no tenían capacidad para defenderse. El conflicto de Barillas se ha convertido en un círculo vicioso de protestas comunitarias, violenta represión por parte de las autoridades estatales y de la empresa, la consiguiente represión y detención de activistas locales y una creciente disensión en el seno de la comunidad.

"Nunca me imaginé que se producirían muertes, secuestros, ni todo el caos que han traído consigo. Hasta aquel día en que nos despertamos, porque creo que habíamos estado profundamente dormidos"

Catarina, habitante de Barillas

Excepcionalmente, el conflicto entre HSC y la población local llegó a ser tan intenso que en 2012 el Gobierno de Guatemala declaró el estado de emergencia en Barillas por primera vez desde el final de la guerra civil en el país. Se suspendieron diversos derechos civiles y políticos en la zona, y la población local denunció redadas en las casas, detenciones sin orden judicial, violencia sexual, robo, intimidación, destrucción de la propiedad y otros tipos de abuso de autoridad.[61] Al menos un manifestante local, Andrés Pedro Miguel, perdió la vida[62] y otros resultaron heridos.[63] Catarina, una mujer que vive en Barillas, reflexiona: "nunca me imaginé que se producirían muertes, secuestros, ni todo el caos que han traído consigo. Ese día despertamos, porque creo que habíamos estado profundamente dormidos."[64]

En un campo de resistencia, los miembros de la comunidad se informan sobre sus derechos y se ponen de acuerdo acerca de cómo seguir con su caso. Piden a las organizaciones y a los ciudadanos de Guatemala y del mundo que sigan mostrándoles su solidaridad. Foto: Giovany Ujpan Mendoza, Oxfam

Los impactos del proyecto sobre las comunidades locales se perciben con mayor claridad en las detenciones dirigidas de activistas locales. Los líderes comunitarios Maynor López, Rubén Herrera, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez han sido encarcelados por oponerse abiertamente al proyecto.[65] A fecha de enero de 2015, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez habían pasado en la cárcel un año y medio de los 33 a los que han sido condenados por dos cargos de asesinato, tras un proceso judicial plagado de incoherencias. Nueve activistas de Barillas, que en 2012 fueron arrestados por ciudadanos particulares sin orden de detención, siguen en prisión en el momento de la publicación del presente informe. Esta situación ha acarreado consecuencias devastadoras para sus familias, que han tenido que asumir los costes económicos. Como explica María Cristina, residente de Barillas, "once mujeres que sufren cada día, porque tienen que cuidar de sí mismas y de sus hijos, y además llevar a la espalda la pesada carga de pensar en cómo salvar a sus maridos encarcelados." En septiembre de 2013, el Tribunal de Guatemala para delitos de alto riesgo absolvió a dos empleados de HSC de estar implicados en la muerte de Pedro Miguel en 2012.[66]

Cuatro años después de su inicio, las actividades del proyecto de Cambalam han sido abandonadas. Quedan las interrogantes de por qué un proyecto relativamente pequeño ha generado un conflicto tan desproporcionadamente grande, y de por qué HSC ha dedicado tantos recursos a su enfrentamiento con las comunidades locales a pesar de seguir sin obtener ningún beneficio económico. Caterina resume la vida en Barillas tras la llegada de HSC: "Se vive con sufrimiento, porque lo único que queremos es libertad, y ahora todas las familias viven con miedo."[67]

> *"Todos querrían atreverse a hablar y decir no, no lo queremos [el proyecto]. Pero dicen que si hablamos nos convertiremos en delincuentes como ellos, así que es mejor que nos quedemos callados. Cuando volvamos, vamos a seguir liderando nuestras comunidades, porque nuestros recursos están en juego."*
>
> Líder comunitario fugitivo en Santa Cruz Barillas, entrevista del 7 de septiembre de 2012

India: Inversión de la IFC en el Fondo de Infraestructura de la India

La central eléctrica de GKEL en Orissa. Foto: Joe Athialy

Resumen del proyecto

En 2008, la IFC realizó una inversión de capital por valor de 100 millones de dólares en el Fondo de Infraestructura de la India (IIF, por sus siglas en inglés).[68] La justificación de la IFC para esta inversión fue “hacer frente a un obstáculo clave para los promotores de proyectos de infraestructura privados o público-privados en la India – la disponibilidad de capital social, [...] fundamental para el crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo en general.”[69] IFC alegó también que uno de los resultados de desarrollo previstos era la colaboración entre la IFC y el IIF para desarrollar el sistema de gestión ambiental y social de éste último, “a través del cual el Fondo gestionará los riesgos sociales y ambientales de todas sus inversiones, garantizando así una mejora del desempeño de todos los proyectos en los que invierta.”[70] IFC señaló que “dado el tipo de proyectos de infraestructura en los que invertiría el Fondo de Infraestructura (como puertos, carreteras, hidroeléctricas y ferrocarril), era probable que acarreasen considerables impactos ambientales y sociales.”[71]

Una de las inversiones del IIF, una central eléctrica de 1.400MW en Orissa, dio origen a la primera reclamación presentada por comunidades ante la CAO en relación a un proyecto de la IFC a través de intermediarios financieros. En abril de 2011, Odisha Chas Parivesh Surekhsa Parishad, una organización de base, y Delhi Forum, una organización de investigación e incidencia, presentaron una reclamación en nombre de las más de 5.000 personas afectadas por el proyecto de GMR Kamalanga Energy Limited (GKEL).[72] La reclamación ponía de manifiesto los problemas en torno a la preocupación existente en relación a la difusión de información sobre los posibles impactos ambientales y sociales de GKEL y, en términos más generales, en relación a los fondos de la IFC[73] canalizados a través de intermediarios financieros. La reclamación alega que la inversión en el IIF se utilizó para asignar los fondos a un proyecto que incumplía las salvaguardias de la propia CFI.[74]

Impactos del projecto

> *"Del total de personas afectadas, el 25% es población indígena, y el 35% pertenece a colectivos excluidos (intocables). Se pisotean los derechos constitucionales que les amparan y se aumenta su vulnerabilidad. Hacemos al Banco Mundial responsable de nuestra desgracia. A día de hoy, nos hemos quedado sin tierras y sin ningún medio de vida."*
>
> Entrevista a Dukhbandhu Bhoi, de la aldea de Achalkut.

El proyecto de GKEL ha estado marcado por graves problemas ambientales y sociales, como un inadecuado proceso de adquisición de tierras y la intimidación de las comunidades afectadas. El proyecto requería que un terreno de regadío, en el que se trabajaban diversos cultivos y con una superficie de casi 1.200 acres (485 hectáreas) se destinase a uso industrial, lo cual contraviene la legislación estatal de Orissa.[75] Casi 1.300 familias perdieron sus tierras cultivables, y otras 100 se han visto económicamente desplazadas por el proyecto. La compra de 78 acres (31 hectáreas) de bosque, sin que se reconocieran los derechos de la comunidad, constituye una violación de la Ley de reconocimiento de los derechos Forestales de 2006.[76] Las familias denuncian haber sufrido coacciones y amenazas con el objetivo de obligarlas a desprenderse de las tierras a precios muy bajos, inferiores en más de 1.600 dólares a los precios medios en la zona durante los tres años previos al inicio del proyecto.[77] Las comunidades también sostienen que, en el caso de familias indígenas y de castas bajas, como intocables y otras castas inferiores que gozan de protección constitucional, la compra de tierras se hizo por la fuerza.[78] Según un informe reciente, el proyecto de GKEL ha aumentado el número de personas sin tierra en aproximadamente un 23%.[79]

Mujeres afectadas por el proyecto de GKEL, en una reunión. Foto: Ranjan Panda

"La empresa ofreció una compensación muy inferior a los precios de mercado. Hemos exigido una compensación a precios de mercado u otras casas en la zona, y empleo en el proyecto para los tres hermanos. Me han amenazado muchas veces por no ceder en mis demandas."

Entrevista a Baishnav Sahu, de la aldea de Maniabeda.

La reclamación presentada ante la CAO[80] denuncia que no se celebró una audiencia pública adecuada, obligatoria en cualquier proceso de adquisición de tierras,[81] y que la información sobre el proyecto (incluyendo las evaluaciones de impacto ambiental) no se puso a disposición de las comunidades afectadas. La reclamación, haciéndose eco de los problemas que desde hace mucho tiempo

preocupan a la sociedad civil de todo el mundo, sostiene que era extremadamente difícil obtener información sobre la participación de la IFC en el proyecto, lo cual imposibilitó que las comunidades afectadas pudiesen manifestar sus preocupaciones respecto al proyecto de GKEL antes de la aprobación del mismo.[82]

Las comunidades afectadas que han exigido un paquete de compensación han sufrido intimidaciones. En junio de 2010, miles de aldeanos intentaron asistir a una reunión sobre la compensación pero se les impidió la entrada, lo cual generó encarnizados enfrentamientos. Después de eso, la policía hizo redadas en las aldeas, golpeó a hombres y mujeres, abrió una investigación contra 500 aldeanos y detuvo a 48 personas, entre las que había cuatro mujeres.[83] Los aldeanos huyeron y se escondieron en el bosque durante muchos días y, desde entonces, la gente vive con miedo.

El proyecto de GKEL ha empeorado las malas condiciones de vida de unas comunidades que ya vivían en una zona muy contaminada —según la Junta Central de Control de la Contaminación de la India, en 2012 era la segunda más contaminada de 88 agrupaciones industriales.[84] La Junta estatal de Control de la Contaminación de Orissa ha decretado que el agua del río Brahmani, de la que dependen las comunidades para su consumo diario, no es apta ni para el consumo ni para el baño.[85] Aunque se suponía que el agua para el proyecto se obtendría del río, las comunidades afectadas denuncian que GKEL ha agotado los acuíferos subterráneos al haber cavado pozos tanto dentro de la zona del proyecto como en unos terrenos privados colindantes.[86] Además, la construcción de un muro alrededor de la fábrica ha destruido el sistema local de regadío, y los canales que regaban las tierras se han quedado secos.[87]

Contrariamente a las promesas de la empresa, se han creado muy pocos empleos para los miembros de la comunidad. Una investigación reciente reveló que solo alrededor del 11% de las personas afectadas por el proyecto habían conseguido trabajo en GKEL, y a las que lo habían hecho sólo se les ofrecían subcontratos carentes de cualquier seguridad laboral.[88]

La empresa sostiene que ha obtenido todas las autorizaciones necesarias del Gobierno de la India y del Gobierno de Orissa antes de poner en marcha el proyecto. Representantes de la empresa señalan que ésta ha puesto de manifiesto su compromiso con el establecimiento de buenas relaciones con las comunidades de acogida, por ejemplo a través de las actividades de la Fundación Varalakshmi GMR, cuyo objetivo es apoyar los medios de vida locales.[89] La CAO ya ha concluido su investigación sobre este caso, y se prevé que sea publicada durante este año.

EL SUFRIMIENTO AJENO: LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA REFORMA

Reconocer los errores y avanzar …

Ante las considerables críticas a su modelo de préstamos mediante intermediarios financieros (tanto por parte de su propio mecanismo de control y de su Junta Directiva como de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas), la IFC ha adoptado medidas para resolver estos problemas. A pesar de lo inadecuado de su primera reacción ante la auditoría enormemente crítica que en 2012 hizo la CAO de su cartera de intermediarios financieros[90] (básicamente, rechazó y negó pruebas bien fundadas),[91] tras la intervención del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial a través del Comité de Efectividad del Desarrollo (CODE, por sus siglas en inglés), la IFC respondió y planteó una serie de reformas.

El resultado fue el "Plan de Acción"[92] de la IFC, presentado en septiembre de 2013 y que desde entonces ha sido revisado y actualizado[93] a medida que han salido a la luz nuevas críticas. Entre las importantes medidas adoptadas por IFC para mejorar su gestión de los riesgos ambientales y sociales se encuentran:

- El compromiso de hacer públicos todos los sub-proyectos financiados a través de fondos de capital inversión privados (aunque no de bancos y otros clientes del sector financiero);
- El compromiso de aplicar las Normas de Desempeño de la IFC a los sub-proyectos que planteen un riesgo elevado;
- Más visitas del personal de la IFC a sus clientes y sub-proyectos;
- Dar prioridad a la evaluación de riesgos y a la creación de un nuevo comité de alto nivel para evaluar los proyectos que planteen un riesgo elevado;
- El compromiso de que los riesgos ambientales y sociales tengan el mismo peso que los riesgos financieros o crediticios;
- La creación de una nueva vicepresidencia de riesgo y sostenibilidad;
- Medidas para mejorar la cultura del personal en relación a la aprobación de préstamos y la minimización de riesgos.

Estas medidas, que se han acogido con satisfacción, son en parte consecuencia de la llegada de "sangre nueva" a la IFC, y suponen tanto la aceptación de los errores del pasado como un compromiso renovado para enmendarlos. En octubre de 2014, la CAO publicó una actualización[94] de su auditoría, evaluando las reformas de la IFC y reconociendo los avances en varios ámbitos. Dicha actualización se muestra crítica con problemas estructurales del modelo de préstamos mediante intermediarios financieros de la IFC, pero acoge con satisfacción el hecho de que la IFC reconozca la importancia de "trabajar en la gestión de riesgos ambientales y sociales con sus sub-clientes", y considera que las medidas adoptadas por IFC "podrían, con el tiempo, mejorar la calidad de los resultados ambientales y sociales de las inversiones de la IFC a través de intermediarios financieros".[95]

Sin embargo, las preguntas fundamentales siguen abiertas: ¿bastarán las reformas para proteger a las comunidades de los perjuicios ambientales y

sociales?; los ejemplos presentados por este informe ¿son verdaderamente casos aislados, “manzanas podridas”, o en realidad no son más que la punta del iceberg, la consecuencia de fallos estructurales más profundos?

…pero, ¿ha hecho IFC lo suficiente?

Negocios arriesgados

IFC afirma que solo una pequeña parte de sus inversiones acarrean un nivel de riesgo elevado. En su Plan de Acción para 2013, la IFC calcula que los proyectos de alto riesgo constituirán sólo el 10% de su cartera, mientras que los proyectos de riesgo medio supondrán el 30%.[96]

Sin embargo, resulta extremadamente difícil verificar las cifras de la IFC en términos de cuál es el porcentaje de su cartera que considera de alto riesgo, principalmente debido a la falta de transparencia que rodea a la mayor parte de los proyectos financiados mediante intermediarios financieros clientes de la IFC, razón por la cual no es posible comprobar esta afirmación de forma independiente. Hasta que no haya una transparencia total (algo que las organizaciones de sociedad civil y las comunidades han estado presionando para conseguir), hay que fiarse sin más de la palabra de la IFC. No obstante, dada la magnitud de las inversiones de la IFC en el sector financiero y la falta de seguimiento y supervisión de las mismas, es probable que el porcentaje de proyectos problemáticos sea en realidad mucho mayor de lo que afirman.

IFC no ha clasificado el proyecto de Santa Rita como de riesgo elevado, a pesar de haber generado un grave conflicto y de la represión de las comunidades indígenas locales. Foto: Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate Social (AJODER)

Una clasificación del riesgo deficiente

En primer lugar, aunque exista el compromiso de hacer pública la información sobre sub-proyectos de alto riesgo (por ejemplo, en el caso de inversiones en fondos de capital inversión privados realizadas siguiendo las Normas de Desempeño de 2012), éste no podrá cumplirse si el personal no identifica

correctamente el nivel de riesgo. Tomemos por ejemplo otro caso de intermediarios financieros en Guatemala, el proyecto hidroeléctrico de Santa Rita, que tiene muchos puntos en común con el proyecto de Cambalam. En 2012, la IFC invirtió 15 millones de dólares en un fondo de capital inversión privado con sede en Nueva York, el Fondo Latino de Infraestructuras Renovables (*Latin Renewables Infrastructure Fund*, LRIF por sus siglas en inglés); sin embargo, en octubre de 2014 la IFC todavía afirmaba que su cliente no financiaba "ningún proyecto de alto riesgo". Esta valoración ignoraba o minimizaba por completo el hecho de que el proyecto estaba situado en una zona indígena, y de que se habían producido graves conflictos en un proyecto similar (Cambalam), por ejemplo la declaración del estado de emergencia el mismo año en que se aprobó la inversión del LRIF. Al parecer, tampoco se tuvo en cuenta el terrible historial del Grupo del Banco Mundial en Guatemala: en la década de 1980, varios cientos de indígenas fueron masacrados durante la construcción de la presa de Chixoy, financiada también por el Banco.[97] La página web de la IFC no divulgó que el de Santa Rita era un proyecto de alto riesgo hasta que las organizaciones de sociedad civil sacaron el caso a la luz, y después de que en octubre de 2014 se celebrase una reunión pública de altos funcionarios de la IFC con un líder indígena.[98] Actualmente, el caso de Santa Rita es objeto de una reclamación presentada ante la CAO por las comunidades afectadas. La reclamación denuncia que no hubo consentimiento libre, previo e informado (que, de nuevo, debería estar garantizado para las comunidades indígenas en virtud de las Normas de Desempeño de 2012), así como una serie de problemas ambientales y sociales relacionados con la diligencia debida por parte de la IFC: divulgación de la información sobre el proyecto y proceso de consulta, impactos sobre las fuentes de agua locales, desplazamientos, población indígena y problemas de seguridad.[99]

Cultura interna e incentivos

Entonces, ¿cómo pueden las partes implicadas (desde la Junta de Gobernadores de la IFC hasta el Comité de Efectividad del Desarrollo –CODE–, hasta las organizaciones de sociedad civil y las comunidades) confiar en la capacidad y voluntad del personal de la IFC para evaluar correctamente los sub-proyectos, y admitir que acarrean un riesgo elevado? Las sucesivas auditorías de la CAO han llegado a la conclusión de que el personal de la IFC no se siente facultado para plantear los problemas de riesgo ambiental y social, o bien que las políticas y procedimientos no les orientan lo suficiente como para identificar los riesgos adecuadamente.[100] Basándose en entrevistas realizadas a personal de primera línea en 2013, la CAO detectó que "el personal que trabaja en cuestiones sociales y medioambientales no sentía que pudiese confiar en el apoyo de sus superiores a la hora de abordar cuestiones polémicas" y que "temen causar problemas".[101] En el caso de Ficohsa, la CAO se encontró con que, para diluir el riesgo, se utilizaba la perturbadora práctica de "no hablar, no preguntar". El personal que trabaja en temas ambientales y sociales "no preguntaba por la posible participación financiera de Ficohsa con sub-clientes de alto riesgo, y sus compañeros del departamento de inversiones con sede en esa región, que tenían conocimiento de los problemas, no hablaban de ellos."[102] Resultan preocupantes los resultados de una encuesta interna realizada al personal de la IFC en 2014, que reveló que sólo el 30% del personal de la IFC creía que el desarrollo era su principal objetivo. Las organizaciones de la sociedad civil todavía no están convencidas de que los mensajes que envía la alta dirección (incluyendo los que el Vicepresidente de la IFC Jin-Yong Cai ha

transmitido en un blog)[103] vayan a tranquilizar al personal de la IFC y a cambiar su cultura e incentivos, e instan a que se elabore un plan de acción urgente que aborde los problemas sistémicos.[104]

Mala gestión del riesgo

También resultan alarmantes los ejemplos de casos en los que el personal de la IFC reconoce y documenta los riesgos en el transcurso de un proceso de diligencia debida, pero sin actuar después en consecuencia. Por ejemplo, en el caso de la inversión que en 2010 realizó la IFC en el Fondo AgriVie Agribusiness,[105] con sede en Sudáfrica. El personal de la IFC se encontraba realizando una evaluación de la cartera de proyectos de su cliente sobre el terreno cuando la IFC tuvo conocimiento de informes de los medios de comunicación que acusaban al Fondo de desalojos forzosos y de acoso a las comunidades locales para dar paso al proyecto. La evaluación concluyó que la IFC debía seguir adelante con su inversión, incluso aunque esa misma visita de evaluación determinó que sólo una “auditoría social completa del proceso de reasentamiento” permitiría obtener pruebas suficientes para que la IFC pudiese negar las acusaciones aparecidas en los medios de comunicación.[106] Dicha auditoría nunca se llevó a cabo, y la IFC siguió adelante con la inversión.

Un año después de la inversión de la IFC, las comunidades presentaron ante la CAO una serie de reclamaciones en las que denunciaban los perjuicios que para ellas habían acarreado los desalojos, al haberlas desplazado de sus tierras, destruido su propiedad privada y obligardo a renunciar a oportunidades en los ámbitos sanitario, educativo y de medios de vida.[107] Las reclamaciones también se hacían eco de problemas más generales relacionados con la diligencia debida en torno al proyecto, por ejemplo la ausencia de una verdadera consulta sobre los desalojos y de un estudio o encuesta de línea de base para acompañar el proceso, además de la falta de la debida diligencia por parte tanto de la IFC como de la empresa. Las reclamaciones señalaban concretamente la vulneración de las Normas de Desempeño 1, 4 y 5 de la IFC.[108] Los denunciantes exigían que se reconociesen y reparasen sus pérdidas, así como que se llevase a cabo una revisión de cumplimiento del proyecto.

La CAO consiguió facilitar un proceso de mediación entre las comunidades afectadas y la empresa, que se tradujo en una serie de acuerdos que se están aplicando en la actualidad. Las comunidades siguen estando lejos de recuperar sus medios de vida, pero el resultado del proceso de mediación ha permitido sentar las bases para que los miembros de la comunidad empiecen a reconstruir sus vidas. La prioridad de las comunidades es la adquisición de tierras donde reasentarse y poder cultivar.[109] Pero, ¿qué pasa con los problemas del proceso de diligencia debida de la IFC antes de la inversión? No se trataron durante el proceso de mediación (ya que en realidad no era el objetivo del mismo), lo cual plantea un interrogante fundamental: ¿cómo se asegura la IFC de extraer aprendizajes desde un punto de vista institucional de este caso, de modo que pueda garantizar que no se repitan los errores del pasado?

¿Cuál es la magnitud del problema?

Más allá de la identificación y gestión de los riesgos, queda pendiente una cuestión aún más importante: ¿son los casos en los que existen conflictos y abusos sólo incidentes aislados, "manzanas podridas", tal y como la IFC ha asegurado a las organizaciones de la sociedad civil? Una investigación reciente[110] sobre los sub-proyectos de la IFC mediante intermediarios financieros (realizada utilizando bases de datos comerciales) ha revelado que puede haber muchos otros casos de conflicto y daños ambientales y sociales. Esta investigación documental analizó durante tres meses las actividades de los intermediarios financieros clientes de la IFC sobre los que había datos disponibles. No constituye una investigación completa de la cartera de intermediarios financieros de la IFC, dado lo limitado del acceso a la información y la falta de tiempo, y los casos concretos aún deben verificarse sobre el terreno. No obstante, la investigación señala varios casos potencialmente preocupantes, por ejemplo una mina en Vietnam que ha provocado el desplazamiento de miles de personas que vivían en la zona; otros proyectos de presas en Guatemala que afectan a la población indígena; varias explotaciones de caucho en Camboya, en las que se han producido desalojos forzosos y violencia por parte del ejército; y un conglomerado de empresas indonesias acusado de acaparamiento de tierras en Papúa Occidental (consultar Anexo 1).

Además, un análisis de la totalidad de las inversiones "de alto riesgo" realizadas por la IFC mediante intermediarios financieros desde 2012 pone de manifiesto que sólo dos de ellas, además de la ya mencionada de Santa Rosa, han hecho públicos sus sub-proyectos. Esta cifra constituye sólo un 6% de las inversiones mediante intermediarios financieros consideradas de alto riesgo (FI-1). En otras palabras*, no hay información pública sobre el destino final del 94% de las recientes inversiones de alto riesgo de la IFC.*[112] Dada esta falta de transparencia, es necesaria una gran cantidad de tiempo y trabajo para dar seguimiento a los fondos y verificar si, en último término, un conflicto o "proyecto problemático" concretos están financiados con fondos de la IFC. Semejante opacidad acarrea dos consecuencias graves: resulta imposible determinar correctamente la magnitud de proyectos problemáticos o inversiones de alto riesgo financiadas por la IFC; y las comunidades cuyas vidas quedan destrozadas por los proyectos no pueden saber si tienen acceso a la justicia y a obtener una reparación a través de la CAO. Esta situación es simplemente insostenible. Las organizaciones de la sociedad civil están exigiendo que se hagan públicos como mínimo el nombre y la ubicación de todos los sub-proyectos financiados mediante intermediarios financieros.

No hay información pública sobre el destino final del 94% de las recientes inversiones de alto riesgo de la IFC[111]

Es necesario un replanteamiento profundo

A través de sus muchos intercambios y consultas con el Banco, la sociedad civil ha planteado varias propuestas técnicas de carácter constructivo para hacer frente a los problemas derivados de los préstamos mediante intermediarios financieros, entre las que se incluyen las verificaciones de terceros realizadas por auditores independientes, la divulgación pública de los sub-proyectos, el adecuado fortalecimiento de las capacidades de los clientes antes de la inversión y la inclusión de medidas vinculantes en los contratos con los clientes que sean intermediarios financieros, a fin de habilitar la aplicación de sanciones en caso de malas prácticas o actos ilícitos. La CAO señala que, hasta cierto punto, la IFC ha dado respuesta a algunas de estas exigencias.[113]

No obstante, tanto la sociedad civil como la CAO siguen preocupadas por el hecho de que los préstamos mediante intermediarios financieros plantean un problema más profundo, que no puede resolverse únicamente con soluciones técnicas rápidas. Los ejemplos destacados en el presente informe ponen de manifiesto los diversos tipos de sufrimiento que padecen algunas de las comunidades más pobres y vulnerables del mundo. En lugar de obtener resultados positivos para su desarrollo, las comunidades locales han soportado desplazamientos, la pérdida de sus medios de vida, miedo, violencia, criminalización y represión. Las mujeres se ven especialmente afectadas debido a la pérdida de acceso a los recursos comunes de los que dependen sus familias, y en algunos casos a causa de la violencia sexual. Asimismo, los estudios de caso ponen de manifiesto un problema sistemático en la identificación de riesgos de la IFC, así como el hecho de que, cuando tiene conocimiento de la existencia de problemas, la institución no adopta medidas eficaces para abordarlos. Al no conocer los impactos que acarrean los sub-proyectos de sus clientes, la IFC no es capaz de ver que sus inversiones repercuten desproporcionadamente sobre las mujeres.

Estos riesgos aumentarán en los próximos años, ya que la IFC prevé incrementar en un 50% sus préstamos a Estados frágiles y afectados por conflictos[114] y que presumiblemente la estrategia del Grupo del Banco Mundial de invertir más en “proyectos transformadores”, como grandes infraestructuras, implicará la utilización del modelo de financiación mediante intermediarios financieros.[115]

En su reciente evaluación de las reformas de la IFC,[116] la CAO llegó a la conclusión de que ésta aún debe abordar el problema fundamental destacado por la CAO en su auditoría inicial: su incapacidad para determinar el impacto total de sus inversiones a través de intermediarios financieros, lo cual implica que no puede garantizar que éstas no causen perjuicios a las comunidades a las que, según su mandato, debe apoyar. La principal conclusión de la CAO es que la IFC “no dispone de una metodología sistemática que le permita determinar si la aplicación de un sistema de gestión ambiental y social realmente alcanza los objetivos de la IFC de no causar perjuicios y mejorar los resultados ambientales y sociales sobre el terreno.” El informe añade que “esto implica que la IFC carece de fundamentos cualitativos o cuantitativos que le permitan afirmar que sus inversiones de intermediación financiera alcanzan dichos resultados, que constituyen una parte fundamental de su estrategia y que son esenciales para el Marco de Sostenibilidad de la IFC.”[117] Se trata de una cuestión sumamente problemática que indica que las reformas no son suficientes, ya que cuestiona la propia lógica de realizar este tipo de inversiones. Tal y como ha puesto de manifiesto el presente informe, en muchos casos los préstamos de la IFC mediante intermediarios financieros han tenido un considerable impacto negativo a largo plazo sobre unas comunidades que ya eran vulnerables. En el fondo, los problemas que preocupan a las comunidades afectadas y a la sociedad civil van más allá de las soluciones técnicas, y tienen que ver con aspectos fundamentales relativos a la lógica de desarrollo que sustenta las inversiones de la IFC en intermediarios financieros. Teniendo en cuenta que sus consecuencias están muy bien documentadas, la IFC seguirá estando obligada a demostrar que, en cada uno de los casos, los préstamos

mediante intermediarios financieros promueven un desarrollo sostenible y favorable a las personas pobres que sería imposible alcanzar a través de inversiones directas, y que sus impactos positivos son mayores que los posibles riesgos que las inversiones puedan acarrear.

RECOMENDACIONES

Además de las soluciones técnicas concretas a corto plazo que las organizaciones de la sociedad civil han recomendado a la IFC,[118] instamos al Presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y al Vicepresidente Jin-Yong Cai a que reconozcan que el modelo de préstamos mediante intermediarios financieros de la IFC requiere reformas de mayor calado, entre las que se incluyen las siguientes:

Gestión de riesgos y sanciones por incumplimiento de los compromisos

- Dado que la IFC carece de capacidad para ofrecer una transparencia y supervisión adecuadas de sus actuales inversiones en el sector financiero, debería realizar menos y mejores inversiones, de modo que sea capaz de garantizar que éstas no causan perjuicios y que cumplen con sus Normas de Desempeño.
- La IFC debería llevar a cabo un análisis riguroso de todos los intermediarios financieros que forman parte de su actual cartera de clientes, así como hacer público el número de proyectos de alto riesgo que financia, además de contar con planes claros de mitigación/contingencia que le permitan abordar los riesgos identificados.
- Es posible que, en circunstancias excepcionales, las inversiones mediante intermediarios financieros con un elevado nivel de riesgo tengan objetivos de desarrollo legítimos que permitan avanzar en la consecución de las metas del Grupo del Banco Mundial, y que además sean más eficaces que las inversiones directas a la hora de alcanzar dichas metas. En ese caso, la IFC debe asumir el mismo grado de responsabilidad en la gestión de los riesgos ambientales y sociales que en los proyectos en los que ha invertido directamente.
- No obstante, y hasta que se reformen los deficientes sistemas de gestión de riesgo con los que cuenta actualmente, la IFC no debería invertir en nuevos proyectos o en clientes de alto riesgo a través de intermediarios financieros.
- La IFC debe incorporar a sus contratos con intermediarios financieros medidas vinculantes que habiliten la aplicación de sanciones en caso de malas prácticas o actos ilícitos. Todos los nuevos contratos de la IFC deben estar redactados de tal manera que exijan la suspensión de la financiación de la IFC y el reembolso inmediato de la inversión, sin perjuicios o tasas, así como la imposición de sanciones (también económicas) en caso de incumplimiento de los requisitos ambientales y sociales.
- La capacidad de la IFC para identificar y gestionar los riesgos mejoraría considerablemente si se llevasen a cabo verificaciones realizadas por terceros en los procesos de evaluación, control y supervisión. Todos los sub-proyectos considerados de categoría FI-1 y FI-2 deberían someterse, como mínimo, a una verificación anual a cargo de terceros.
- La IFC debería subsanar las deficiencias en el ámbito de los derechos humanos que permitieron, por ejemplo en el caso de HAGL/Camboya, que la Corporación realizase una inversión adicional en un intermediario financiero tras la aprobación de las Normas de Desempeño, pero sin

exigir la aplicación de salvaguardias más estrictas a esa inversión, al considerarse que esos fondos adicionales formaban parte de un acuerdo en vigor.

Transparencia

- La IFC debe convertir la divulgación de todos los sub-clientes y sub-proyectos en requisito imprescindible para todos los intermediarios financieros que quieran recibir sus inversiones (no sólo los fondos de capital inversión privados). En caso de que la legislación nacional prohíba la divulgación de cierta información, debe hacerse pública tanta información como sea posible, indicando la razón de que no se pueda acceder al resto.

Fortalecimiento de capacidades

- La IFC debe seleccionar a sus clientes de forma más cuidadosa, estandarizada, sistemática y transparente. En caso de que se escoja a un cliente cuya capacidad para gestionar los riesgos ambientales y sociales sea limitada, deben fortalecerse sus capacidades antes de que se lleve a cabo la inversión.

Reforma Institucional

- A fin de abordar la reforma de la cultura institucional necesaria para que el personal de la IFC se vea facultado para identificar y gestionar los riesgos, la IFC debe publicar un plan de acción cuyo objetivo sea hacer frente a los problemas generalizados y las deficiencias sistémicas en su cultura institucional y sus incentivos. Dicho plan de acción debe incorporar compromisos concretos, cuantificables y sujetos a plazos, que deben publicarse y sobre los que se debe responder ante la Junta de Gobernadores de la IFC y las partes interesadas.
- A la hora de seleccionar, evaluar, supervisar y controlar a los intermediarios financieros que forman parte de su cartera de clientes, la IFC debe fortalecer las capacidades de su personal en materia de evaluación de riesgos relativos al género, a fin de llevar a cabo análisis efectivos y perfiles con datos desglosados por género que incluyan los riesgos para las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños y las niñas y las comunidades marginadas, incluyendo los pueblos indígenas.
- En el proceso de reforma de su estrategia de inversiones en el sector financiero, la IFC debe definir un proceso para recibir aportaciones independientes, realizar consultas participativas a las comunidades afectadas y contar con una participación más amplia de las partes interesadas.

ANEXO 1

Ejemplos de otras inversiones de la IFC en intermediarios financieros que, de acuerdo con los indicios que presenta la investigación inicial, podrían plantear riesgos para las comunidades.

Hidro Xacbal y otras presas hidroeléctricas (Guatemala): la IFC podría haber participado financieramente en la presa de Hidro Xacbal, que se construyó en las tierras de poblaciones indígenas que denuncian no haber recibido una compensación adecuada.[119] La IFC también también ha participado en la presa Hidro Norte por su inversión en el Fondo Mezzanine de Infraestructura para América (Central Central American Mezzanine Infrastructure Fund).[120]

Explotaciones de caucho (Camboya y Laos): La IFC podría haber participado financieramente en varias grandes explotaciones de caucho en Camboya y Laos que presuntamente están vinculadas a desalojos forzosos y violencia contra los habitantes de las aldeas donde se ubican dichas explotaciones.[121]

Medco Power Indonesia (Indonesia): La IFC podría haber participado financieramente en un conglomerado de empresas indonesio vinculado con grandes concesiones que, según la sociedad civil local, han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas.[122]

Masan Group (Vietnam): La IFC podría haber participado financieramente en una de las mayores minas de tungsteno a cielo abierto del mundo, que según las estimaciones del Banco Mundial habría afectado a 7.464 personas residentes en la zona.[123]

Grupo Pellas (Nicaragua): La IFC podría haber participado financieramente con un productor de azúcar cuyas explotaciones en Guatemala han dado lugar amuertes, lesiones y desalojos entre la población indígena.[124]

EDL Generation (Laos): La IFC ha participado participado financieramente con una filial de la empresa eléctrica estatal de Laos, que gestiona siete presas hidroeléctricas.[125]

NOTAS

1 CAO (2014) “Guatemala / Real LRIF-01 / Coban” http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=227 (esta URL y las siguientes se consultaron por última vez el 28 de febrero de 2015).

2 Bretton Woods Project (2014) “Follow the Money: the World Bank Group and the use of financial intermediaries”, http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2014/04/B_W_follow_the_money_report_WEB-VERSION.pdf.

3 Ibíd.

4 Ibíd.

5 Según la CAO, “los negocios de la IFC con intermediarios financieros no dejan de incrementarse, con nuevos compromisos por valor de más de 10.000 millones de dólares, en una cartera de desembolsos de más de 14.000 millones de dólares durante el año fiscal 2014 — lo cual los convierte en un considerable y cada vez mayor porcentaje de las actividades del Grupo del Banco Mundial”. Consultar CAO (2014) “Monitoring of IFC’s Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries” http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf

6 Para el conjunto del Grupo del Banco Mundial, sólo en los cuatro años desde el año fiscal 2010 al año fiscal 2013, las inversiones en intermediarios financieros se han multiplicado por más de dos, pasando de constituir menos del 10% a casi el 21% del total de compromisos del grupo. Bretton Woods Project (2014), op. cit. El Banco Europeo de Inversiones ha duplicado sus préstamos a intermediarios financieros en los diez años previos a 2012. Oxfam (2012) Negocios arriesgados: préstamos mediante intermediarios y financiación del desarrollo2, http://www.oxfam.org/en/research/risky-business; y entre 2009 y 2013, los préstamos a través de intermediarios financieros constituyeron alrededor del 40% del total de préstamos del BEI fuera de Europa (según una investigación no publicada elaborada por *Counter-balance*, con las cifras del informe anual del BEI).

7 Presentación de la IFC ante el Comité de Efectividad del Desarrollo del Banco Mundial, 4 de septiembre de 2013, gestión de riesgos medioambientales y sociales de las instituciones financieras en IFC: “Permite a la IFC proporcionar recursos financieros a millones de PYMES, microempresas y particulares a los que nunca podría llegar directamente. Esta colaboración ha fortalecido las capacidades de los intermediarios financieros para financiar actividades en sectores económicos esenciales, como la agricultura, la vivienda, la industria, las infraestructuras y los servicios sociales.”

8 CFI (2014) “Respuesta al informe de seguimiento de la CAO sobre intermediarios financieros”, http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/archive/documents/OfficialresponsetoCAOFIMonitoringReport_November202014.pdf

9 Puede consultar, por ejemplo, Oxfam (2011) “Bridging the Gap: Building a Financial Services System that serves poor people in Sri Lanka”, http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-services-system-that-serves-poor-people-i-136102

10 Grupo de Evaluación Independiente (2013) Resultados y desempeño del Grupo del Banco Mundial 2012. Washington, DC: Banco Mundial. Creative Commons Attribution CC BY 3.0 http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-9853-1

11 Bretton Woods Project (2014) op cit.

12 Puede consultar, por ejemplo, Oxfam (2012) op cit; Bretton Woods Project (2014) op cit. y Eurodad (2012) “Cashing in on climate change? Assessing whether private funds can be leveraged to help the poorest countries respond to climate challenges” http://eurodad.org/Entries/view/1345788/2012/04/18/Cashing-in-on-climate-change-Assessing-whether-private-funds-can-be-leveraged-to-help-the-poorest-countries-respond-to-climate-challenges

13 Puede consultar, por ejemplo: Bretton Woods Project (2014) “Response letter to the head of IFC Jin-Yong Cai re: IFC investment in the financial sector”, http://www.brettonwoodsproject.org/2014/03/13785/; Bretton Woods Project (2013) “Letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC investment in the financial sector”, http://www.brettonwoodsproject.org/2013/03/art-572178/; Bretton Woods Project (2013) “Response letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC investment in the financial sector”, http://www.brettonwoodsproject.org/2013/11/response-letter-wb-pres-ifc-fis/; Bretton Woods Project (2014) “Civil society letter re: the IFC and lessons learned”, Jin-Yong Cai (2014) ‘Achieving Impact in Development Requires Us to Venture into Tough Places’, http://blogs.worldbank.org/voices/achieving-impact-development-requires-us-venture-tough-places

14 Puede consultar, por ejemplo: CAO (2012) “CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries”, http://www.cao-ombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf; http://www.cao-

ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209; IFC "IFC Response to CAO Audit of Sample of IFC Investments in Financial Intermediaries",http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/industries/financial+markets/ifc_response_to_cao; CAO (2014) "Monitoring of IFC's Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries", http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf

15 CFI (2012) "The IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability", http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73da eca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES

16 CAO (2012) "CAO Audit of a Sample of IFC Investments", http://www.cao-ombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf; CAO (2013) 'Honduras / Ficohsa-01/ CAO Vice President Request', http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209; IFC 'IFC Response to CAO Audit of Sample of IFC Investments in Financial Intermediaries', http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/industries/financial+markets/ifc_response_to_cao; CAO (2014) 'Monitoring of IFC's Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries', http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoring Report_October102014.pdf

17 Jin-Yong Cai (2014), op. cit.

18 SPI: VEIL/Dragon Capital Group, 2002 (Número de proyecto 10740): préstamo registrado de 12 millones de dólares; SPI: VEIL II, 2003 (Número de proyecto: 20926): inversión de capital registrada de 8 millones de dólares; IFC informó a Global Witness de que había invertido 6,95 millones de dólares adicionales a través de su participación en una ampliación de capital en 2006. DCG/VEIL está constituida en las Islas Vírgenes Británicas.

19 SPI: VEIL/Dragon Capital Group, 2002 (Número de proyecto 10740).

20 Ibíd.

21 Carta de queja a la CAO (2014), http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/ComplainttoCAOreDragonCapital-HAGL.pdf

22 Con una participación en el capital de aproximadamente el 6%. Global Witness (2013) "Rubber Barons: How Vietnamese Companies and International Financiers are Driving a Land Grabbing Crisis in Cambodia and Laos", www.globalwitness.org/rubberbarons

23 Actualmente, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas es un requisito establecido por las Normas de desempeño de la IFC de 2012; y por el derecho internacional (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y Convención nº 169 de la OIT).

24 Global Witness (2013), op cit.

25 Ibíd.

26 Inclusive Development International (2014) 'Roundtable Discussion on Land Rights in the Draft World Bank Environmental and Social Framework', http://www.inclusivedevelopment.net/safeguarding-land-housing-and-indigenous-peoples-rights/ consultar Camboya: estudio de caso sobre Dragon Capital, de Thuon Ratha.

27 Para obtener más información acerca de los impactos sociales y sobre los derechos humanos de las actividades de HAGL en Camboya puede consultar: Equitable Cambodia y Inclusive Development International, A Human Rights Impact Assessment of Hoang Anh Gai Lai's Economic Land Concessions in Ratanakiri, Cambodia. Puede solicitarlo en info@inclusivedevelopment.net.

28 Ibíd.

29 Global Witness, "Rubber Barons", op.cit.

30 HAGL Sociedad Anónima, Nota de Operación confidencial, 11 de mayo de 2011, citada en Global Witness (2013), op.cit.

31 Global Witness (2015), comunicación personal.

32 CAO (2014) 'CAO Assessment Report: Complaint regarding IFC's VEIL II Project (20926)', http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/VEILII-01FinalAssessmentReportMay2014.pdf. Ver también: K. TÉ (2013) 'Bầu Đức: Trồng cao su từ đất rừng buộc phải khai hoang, chặt cây', http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20130517/bau-duc-trong-cao-su-tu-dat-rung-buoc-phai-khai-hoang-chat-cay/548763.html.

33 Alexandra Klopfer (2011) "IFC Capitalization Fund Invests $70 Million in Ficohsa to Support SMEs in Honduras", http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+news/ifc+asset+management+company+press+releases/ifc+capitalization+fund+invests+$70+million+in+ficohsa+to+support+smes+in+honduras. La inversión de 70 millones

de dólares se compone de 32 millones de dólares de capital y 38 millones de dólares de deuda subordinada.

34 IFC 'Corporacion Dinant S.A. de C.V: Summary of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/2f9b9d3afcf1f894852576ba000e2cd0

35 CAO (2012) Honduras/Dinant-01/CAO Consulta del Vicepresidente, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188

36 CAO (2014) "Investigación de la CAO sobre el desempeño ambiental y social de la IFC en relación con las inversiones en Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.", http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOInvestigationofIFCRegarding Ficohsa_C-I-R9-Y13-F190.pdf

37 CAO (2012) Honduras/Ficohsa-01/CAO Consulta del Vicepresidente, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209

38 CAO (2014) 'CAO Investigation of IFC Environmental and Social Performance in relation to investments in Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.',http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOInvestigationofIFCRegardingFicohsa_C-I-R9-Y13-F190.pdf.

39 Ibíd. La auditoría de la CAO señala también que, "analizando la información disponible en los medios de comunicación, la CAO toma nota de los informes que señalan problemas ambientales y sociales en relación a varios clientes de Ficohsa que tienen actividades en los sectores de la agroindustria, el turismo, la construcción, y el hidroeléctrico."

40 R. Falla (2000) "Una Toma de Tierras abre Puertas a la Reforma Agraria", Revista Envío, http://www.envio.org.ni/articulo/1032

41 CAO (2013) "Auditoría de la Inversión de la IFC en la Corporación Dinant S.A. de C.V., Honduras", http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/DinantAuditCAORefC-I-R9-Y12-F161_ESP.pdf

42 El Heraldo (2012) "Acusan a Guardias de Cinco Muertes en Bajo Aguán', http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Sucesos/story.csp?cid=620707&sid=293&fid=219

43 RightsAction, (2013) "Se atribuyen violaciones de los derechos humanos a fuerzas armadas en el Valle del Bajo Aguan, en Honduras", http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf

44 Human Rights Watch, (2014) Aquí No Hay Investigaciones, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/honduras0214spweb.pdf

45 RightsAction, op. cit.

46 Dina Meza (2010) "Quinto Campesino Aparece Asesinado entre la Maleza en El Tumbador", Defensores en Línea, http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1061:quinto-campesino-aparece-asesinado-entre-la-maleza-en-el-tumbador&Itemid=159.

47 Plataforma de Derechos Humanos (2010) "Situación de los Derechos Humanos en el Valle del Aguán: Informe misión de organizaciones de DDHH".

48 Human Rights Watch, op. cit.

49 Corporación Dinant, (2011) Correo electrónico a FIDH, 6 de mayo 2011.

50 Plataforma de Derechos Humanos (2010) op. cit.

51 Human Rights Watch, op. cit.

52 'CSO response to the CAO investigation into IFC investment in Corporación Dinant, Honduras', https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cso-statement-cao-investigation-ifc-dinant-investment-20jan2014.pdf

53 IFC (2014) 'Corporación Dinant Enhanced Action Plan – FAQs', http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region ext_content/regions/latin+america+and+the+caribbean/strategy/corporacion_dinant_faq

54 O. Chinchilla, Fiscal General de la República citado en Proceso Digital (2014) 'Crean unidad especializada para investigar crímenes en el Bajo Aguán', http://www.proceso.hn/component/k2/item/7159.html

55 M. Palacios (2014) "El Caso Tumbador Suma en la Larga Lista de Impunidad en el Aguán", Defensores en Línea, http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3187%3Ael-caso-tumbador-suma-en-la-larga-lista-de-impunidad-en-el-aguan&Itemid=166

56 S. Rodríguez (2015) 'Campesinos asesinados en El Tumbador estaban alegres por pronta cosecha'http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3415:campesinos-asesinados-en-el-tumbador-estaban-alegres-por-pronta-cosecha&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

57 CIFI (2014) “Projecto: Canbalam’, http://www.cifidc.com/wp-content/uploads/2014/07/project_canbalam.pdf

58 A. Guereña y R. Zepeda (2012) “El desarrollo que no queremos”, Informe de investigación de Oxfam Intermón, http://www.oxfamintermon.org/es/documentos /04/12/12/desarrollo-que-no-queremos-conflicto-en-torno-al-proyecto-hidroelectrico-de-hidr

59 Guereña y Zepeda, op. cit.

60 CIFI, op. cit.

61 Guereña y Zepeda, op. cit.

62 S. Bastos (2013) “Guatemala, Caso 11/2012: Acoso y Derribo a la Justicia”, Periodismo Humano, http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/guatemala-caso-1182012-acoso-y-derribo-a-la-justicia.html

63 Guereña y Zepeda, op. cit.

64 Entrevista a María Cristina y Catarina (2014) Defensores del territorio en Santa Cruz, Barillas, copia archivada por el autor.

65 Hidralia acusa a Rubén Herrara de cometer doce delitos desde 2009, incluyendo el secuestro. La empresa también le ha acusado de liderar las manifestaciones del 1 de mayo de 2012, por lo que estuvo en prisión durante 76 días en 2013. Entre marzo y abril de 2012, los tribunales han emitido 23 órdenes de detención por un amplio abanico de cargos, entre ellos el de terrorismo. Nueve líderes detenidos han pasado nueve meses en prisión.

66 S. Bastos, op. cit.

67 Entrevista a María Cristina y Catarina, op. cit.

68 CFI, Fondo de Infraestructura de la India, resumen del proyecto propuesto, http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/2bc34f011b50ff6e85256a550073ff1c/15378ad7f9e4e3b7852576ba000e2a8d

69 Ibíd.

70 Ibíd.

71 CAO (2013) ‘Complaint Regarding IFC’s investment in the India Infrastructure Fund IFC India Infrastructure Fund (#26237)‘, Evaluación del Fondo de Infraestructura de la India. http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/FinalCAOAssessmentReportIIF-GMRcomplaintFebruary2013.pdf

72 CAO (2011) India / Fondo de Infraestructura de la India -01/Distrito de Dhenkanal. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=165

73 Ibíd.

74 Complaint letter to the CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf

75 Carta de queja a la CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf. Carta de GKEL (2009) GKEL/BBSR/ENERGY/09-10/139 al Secretario Adjunto, Ministerio de la Energía, a fecha de 18/04/2009. Si desea un análisis más detallado de las tierras de regadío adquiridas y la legislación a la que están sujetas, puede consultar The Research Collective (2012) “Negotiating Power: Socio-economic impacts of the GRM Kamalanga Energy Limited project affected area in Dhenkanal Odisha”, p. 10.

76 The Research Collective (2012), op. cit., p. 17.

77 El precio medio de los terrenos agrícolas en Mangalpur en los tres años previos a la adquisición era de Rs.3.99.638 por acre — casi un Lakh (100.000 rupias), aproximadamente1.600 dólares americanos más de lo que GKEL pagó a los habitantes de Mangalpur. Puede consultar: The Research Collective PSA (2014) “Down the Rabbit Hole: What Bankers aren’t telling you - An Analysis of Lending Practices Adopted by Banks to Finance “Developmental” Projects in India”, febrero de 2014, p. 15.

78 Si desea más información sobre estas acusaciones, puede consultar The Research Collective (2012), op. cit., p. 12.

79 Según The Research Collective (2012), op. cit., p. 15, la carencia de tierras entre los encuestados aumentó, pasando del 6% al 29% después del proyecto.

80 Carta de queja a la CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf

81 The Research Collective (2012), op. cit., p. 12. Explica las deficiencias del proceso de consulta pública.

82 Carta de queja a la CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf

83 Para leer un relato de los hechos acaecidos en junio de 2010 y las posteriores actuaciones policiales, por favor consulte la carta de queja a la CAO (2011), http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndiaIIFcomplaint_April152011_web.pdf, sección 2.4.15-17; y The Research Collective (2012), op. cit., pp. 20–1.

84 The Research Collective (2012) op. cit., p. 4.

85 Ibíd.

86 La intención de GKEL de perforar pozos en la aldea de Durgapur también aparece reflejada en los registros municipales (del distrito). Notas de una reunión entre la empresa y la comunidad en la Oficina del Recaudador Adjunto, a fecha de 13 de abril de 2010.

87 The Research Collective (2012), "Negotiating Power" reveló que GKEL había obtenido la Autorización Ambiental del Ministerio de Medioambiente y Bosques (MoEF, por sus siglas en inglés) en base a un Informe de evaluación medioambiental fraudulento, que SS Environics elaboró para GKEL. Dicho informe afirmaba que el proyecto no adquiriría tierras de regadío o que produjesen dos cosechas; sin embargo, se han adquirido 455 ha de terrenos irrigados por el Canal de regadío Rengali. El Informe de evaluación declaró que sólo se adquirían 1.038 acres, pero la compra fue de más de 1.175 acres.

88 Ibíd.

89 CAO (2013) 'Complaint Regarding IFC's investment in the India Infrastructure Fund IFC India Infrastructure Fund (#26237)', http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/FinalCAOAssessmentReportIIF-GMRcomplaintFebruary2013.pdf.

90 CAO (2012) 'CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries', http://www.cao-ombudsman.org/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf

91 R. Kaldany (2013) The World Bank/IFC/M.I.G.A 'Office Memorandum', http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/documents/FINALIFCResponsetoCAOReport1-31-2013.pdf

92 IFC (2013) 'E&S Risk Management of Financial Institutions at the IFC', http://www.cao-ombudsman.org/documents/IFCpresentationforCODE-ESRMforFIs-final.pdf

93 IFC (2014) 'IFC's Environmental & Social Lessons Learned', Technical Briefing for the Board, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/557c4180438e1ed4 8f72bf869243d457/IFC_EnvironmentalSocialLessonsLearned-042014.pdf?MOD=AJPERES; y IFC (2014) 'IFC Environmental and Social Update', http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cea2640045e78c329befbb9916182e35/Dinant_E%2BS_Update_CSO_Meeting_Oct-10-2014.pdf?MOD=AJPERES

94 CAO (2014) 'Monitoring of IFC's Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries', http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf. Puede consultar también M. Romero (2014) 'Watchdog warns World Bank private-sector lending reforms show progress, but still fall short', http://eurodad.org/Entries/view/1546286/2014/11/04/Watchdog-warns-World-Bank-private-sector-lending-reforms-show-progress-but-still-fall-short

95 CAO 'CAO Compliance Audit of IFC's Financial Sector Investments', http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/archive/index.html

96 Presentación de la IFC al Comité del Banco Mundial sobre Eficacia del Desarrollo, 4 de septiembre de 2013, "E&S risk management of financial institutions at the IFC', http://www.cao-ombudsman.org/documents/IFCpresentationforCODE-ESRMforFIs-final.pdf

97 International Rivers 'Chixoy Dam', http://www.internationalrivers.org/campaigns/chixoy-dam

98 Consulte Bretton Woods Project (2014) 'IFC lending through financial intermediaries – a year on from the action plan, what have we learned?', http://www.brettonwoodsproject.org/2014/10/ifc-lending-financial-intermediaries-year-action-plan-learned/ y IFC 'Real LIRF: Summary of Investment Information', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SII31458

99 CAO (2014) 'Guatemala / Real LRIF-01/Coban', http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=227

100 Consulte las auditorías de la CAO, incluyendo Tata Mundra: CAO (2013) 'CAO Audit of IFC Investment in Coastal Gujarat Power Limited, India', http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAuditReportC-I-R6-Y12-F160.pdf; Ficohsa: CAO (2013) 'Honduras / Ficohsa-01/ CAO Vice President Request', http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209; y Dinant: CAO (2012) 'Honduras / Dinant-01/CAO Vice President Request', http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188

101 CAO (2013) 'CAO Audit of IFC Investment in Corporación Dinant S.A. de C.V., Honduras', http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/DinantAuditCAORefC-I-R9-Y12-F161_ENG.pdf

102 CAO (2014) 'CAO Releases Investigation of IFC Environmental and Social Performance in relation to Investments in Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. (Ficohsa)', http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOCommunique_Ficohsa_SummaryofFindings_August112014.pdf

103 Jin-Yong Cai (2014), op. cit.

104 La Plataforma Agraria de Honduras, Movimiento Madre Tierra (Honduras), SOMO (Países Bajos), Urgewald (Alemania), Inclusive Development International, Bank Information Center, Oxfam, Global Witness, Bretton Woods Project, y Centro de Derecho Ambiental Internacional (2014) "New investigation finds "don't ask, don't tell" policy leads to IFC blunders in Honduras human rights scandal", http://oxf.am/ux4.

105 IFC (2010) 'Agri-Vie: Summary of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/projectdisplay/spi_dp27674

106 R. Novozhilov (2010) Informe de misión presentado a la IFC en marzo de 2010

107 Consultar: CAO (2011) 'Uganda / Agri-Vie Fund-01/Kiboga', http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=180 y CAO (2011) 'Uganda / Agri-Vie Fund-02/Mubende', http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=181

108 IFC (2012), Política sobre sostenibilidad ambiental y social, 1 de enero de 2012.

109 Consultar: Oxfam (2014) 'Mubende community in Uganda moves forward with implementation of agreement with New Forests Company', http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/latest-campaign-news/2014/04/mubende-community-moves-forward y Oxfam 'Second Ugandan community reaches agreement with British company', http://www.oxfam.org/en/campaigns/second-ugandan-community-reaches-agreement-british-company

110 D. Roasa (próxima publicación) "Investigación sobre inversiones de la IFC en intermediarios financieros: fase 1".

111 De las 49 inversiones que clasificadas dentro de la categoría FI-1 desde 2012, sólo 3 incluyen una lista de sub-proyectos: IFC (2012) 'GC Credit Summary of Investment Information', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/450d889a34690ea885257ab4006a8c14?opendocument; IFC (2013) 'Lereko Metier Sustainable Capital Fund Trust: Summary of Investment Information', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/f516a8eb5128c9fc85257b430065fe98?opendocument; IFC (2012) 'Real LRIF: Summary of Investment Information', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SII31458

112 Ibíd.

113 CAO (2014) 'Monitoring of IFC's Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries', http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf

114 IFC 'IFC in Fragile and Conflict Affected-Situations', http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/aad96f804f36e47f9be0df032730e94e/AM2014_IFC_Issue_Brief_FCS+.pdf?MOD=AJPERES

115 WBG (2013), "Estrategia del Grupo del Banco Mundial" https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16095/32824_ebook.pdf?sequence=5

116 CAO (2014) 'Monitoring of IFC's Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries', http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOFIAuditMonitoringReport_October102014.pdf

117 Eurodad (2014) 'Watchdog warns World Bank private-sector lending reforms show progress, but still fall short', http://eurodad.org/Entries/view/1546286/2014/11/04/Watchdog-warns-World-Bank-private-sector-lending-reforms-show-progress-but-still-fall-short

118 Puede consultar por ejemplo: Bretton Woods Project (2014) 'Response letter to the head of IFC Jin-Yong Cai re: IFC investment in the financial sector', http://www.brettonwoodsproject.org/2014/03/13785/; Bretton Woods Project (2013) 'Letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC investment in the financial sector', http://www.brettonwoodsproject.org/2013/03/art-572178/; Bretton Woods Project (2013) 'Response letter to World Bank President Dr. Jim Yong Kim re: IFC investment in the financial sector', http://www.brettonwoodsproject.org/2013/11/response-letter-wb-pres-ifc-fis/; Bretton Woods Project (2014) 'Civil society letter re: the IFC and lessons learned', http://www.brettonwoodsproject.org/2014/06/civil-society-letter-re-ifc-lessons-learned/

119 IFC 'IFC Invests in Guatemala's Banco G&T Continental, Promoting Access to Finance for SMEs', http://ifcext.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/BBECDE9D9E59DDFB85257496004C3B3D?OpenDocument; IFC 'IFC Capitalization Fund Invests $100 Million in Banco G&T Continental to Support SME's in Central America', http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/95C767891A6E848085257AD300547039; Nisgua (2007) 'Ixil communities demand greater benefits from new hydroelectric dam', http://www.nisgua.org/themes_campaigns/index.asp?id=2982&mode=pf

120 IFC (2007) 'CAMIF: Summary of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/688B9122C3914B8F852576BA000E2B0A; en noviembre de 2012, CAMIF adquirió una participación del 3% en Hidronorte SA; IFC (2007) 'CIFI: Summary of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/4AE7AE952CF18EEC852576BA000E2B35; Telesur (2014) 'Clashes over dam construction in Guatemala leave two dead', http://www.telesurtv.net/english/news/Clashes-Over-Dam-Construction-in-Guatemala-Leave-Two-Dead-20141118-0051.html

121 IFC (2011) 'VI Fund II Summary of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP30272; Gemadept Corporation (2012) 'Announcement On Convertible Debt Issuance', http://www.gemadept.com.vn/assets/uploads/myfiles/files/ThongBao_CoDong/20120816-GMD-TBPHNCD_en.pdf; Sahrika (2012) 'Mondulkiri villagers face eviction deadline', http://sahrika.com/2012/05/23/mondulkiri-villagers-face-eviction-deadline/; Human Rights Council (2012) 'Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia, Surya P. Subedi', http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-63-Add1_en.pdf; IFC (2002) 'Vietnam--IFC Invests in Dragon Capital', http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/1f70cd9a07d692d685256ee1001cdd37/2961065042a04f9e85256c5c005412de?OpenDocument; Dong Phu Rubber JSC, http://www.4-traders.com/DONG-PHU-RUBBER-JSC-6499369/company/; Land Matrix 'Vietnam Rubber Group', http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-investor-name/117/?order_by=; Tay Ninh Rubber JSC (TRC), http://www.4-traders.com/TAY-NINH-RUBBER-JSC-6500786/company/; Global Witness (2013) 'Rubber Barons: How Vietnamese companies and international financiers are driving a land grabbing crisis in Cambodia and Laos', https://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/RubberBaronsSummaryENGLISH.doc.pdf

122 IFC 'IFC Invested about $300 Million in Indonesia Last Fiscal Year to Support Private Sector Development', http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/9D0E74CE6C1AB70085257A9200342E2F; T. Sipahutar (2014) 'Medco Power to have IPO', http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/08/medco-power-have-ipo.html; MIFEE (2015) 'Kamoro people take a stand against Freeport smelter plans', https://awasmifee.potager.org/; http://www.redd-monitor.org/wp-content/uploads/2012/05/mifee_en.pdf

123 IFC (2010) 'Masan Group: Summary of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/c9aba76ed1df1938852571c400727d66/f2d989ba07ba43fd852576c6005d49dd?opendocument; IFC (2003) 'Summary of Project Information (SPI)', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/dfe5879675a79794852576ba000e24f9?opendocument; Nui Phao Mining Joint Venture Company (2006) 'Nui Phao Mining Project, Dai Tu District, Thai Nguyen Province: Resettlement Action Plan', http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/07/6981373/vietnam-nui-phao-mining-project-resetlement-action-plan.

124 IFC (2006) 'Nicaragua Sugar Estates Limited S.A.: Summary Of Proposed Investment', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/DocsByUNIDForPrint/B03A85F8D867C21E852576BA000E2900?opendocument; Land Matrix 'Grupo pellas', http://www.landmatrix.org/en/get-the-detail/by-investor-name/2514/?download_format=csv&order_by=&starts_with=G; http://www.ghrc-usa.org/our-work/current-cases/polochic/.

125 IFC (2002) 'Vietnam--IFC Invests in Dragon Capital', http://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/1f70cd9a07d692d685256ee1001cdd37/2961065042a04f9e85256c5c005412de?OpenDocument; Dragon Capital 'First investment by MBCDF', http://www.dragoncapital.com/dragon-capital-funds/first-investment-by-mbcdf; IFC (2012) 'Leopard Bangladesh: Summary of Investment Information', http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/c008ec29ff01ad5485257ac2006ad92d?opendocument&Highlight=0, Bangladesh; A. Davis (2011) 'Leopard Capital takes stake in Laos hydro-power firm', http://www.avcj.com/avcj/news/1935754/leopard-capital-takes-stake-laos-hydro-power-firm; EDL-Gen 'Business Development Planning of EDL-Gen', http://www.edlgen.com.la/en/page.php?post_id=8; International Rivers 'Other Destructive Pipeline and Legacy Projects', http://www.internationalrivers.org/campaigns/other-destructive-pipeline-and-legacy-projects

© Oxfam Internacional, abril de 2015

Este documento ha sido escrito por Kate Geary, con los estudios de caso aportados por Ricardo Zepeda, George Redman, Natalie Bugalski, Thuon Ratha, Johanna van Strien, Luiz Fernando Vieira, Joe Athialy, Lakshmi Premkumar, Vijayan MJ, Diana Kearney, y Radhika Sarin. Oxfam, Inclusive Development International, Global Witness, Bretton Woods Project, Bank Information Center, Madre Selva, Nisgua, Programme for Social Action, Equitable Cambodia, Urgewald, Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH) y Movimiento Madre Tierra Honduras agradecen la colaboración de Arantxa Guereña, Anne Bordatto, Ellen Moore, Dustin Roasa, Maria-Jose Romero y Rob Nash en su elaboración. Forma parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y de desarrollo. El presente documento está dedicado a la memoria de Joseph Ntamashakiro y Eriphaz Rutaryabusha, que lucharon con valentía para exigir justicia para sus comunidades.

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor póngase en contacto con advocacy@oxfaminternational.org

Esta publicación está sujeta a *copyright*, pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del *copyright* solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto con policyandpractice@oxfam.org.uk.

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.

Publicado por Oxfam GB para Oxfam International con ISBN 978-1-78077-838-9 en abril de 2015.
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

OXFAM

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan juntas en más de 90 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza. Para más información, puede escribir a cualquiera de las organizaciones o visitar la página www.oxfam.org.